

ron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Artcaga.*—*P. Orlaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, 20 Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el C. Lic. Genaro Raigosa, en favor de Andres Castro que fué condenado á muerte por el C. Jefe político de la Capital de ese Estado, por varios delitos de robo con asalto.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que el Señor defensor Lic. D. Genaro Raigosa, solicita amparo de la Justicia de la Union, por haber sido sentenciado á muerte por la Jefatura política de la Capital su encomendado Andres Castro, acusado del delito de robo con asalto perpetrado en la persona de Evaristo Saavedra, la tarde del 13 de Setiembre del corriente año, y por otros hechos criminales anteriores, cuyos antecedentes se han acumulado al proceso últimamente instruido por aquella autoridad. Dicho Señor Letrado, cree violadas en la persona de Castro las garantías individuales que la Constitucion general de la República concede á los ciudadanos en sus artículos 13, 14 y 21, y conceptua comprendido el caso, en la frac-

TOMO V.—PARTE II.

cion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

En consecuencia, se trata de la procedencia y aplicacion legal de la ley de 3 de Mayo del corriente año, expedida contra los salteadores y plagiaros, cuya disposicion se dice privativa y especial, y no emanada legítimamente de la Constitucion general; y se niega que haya sido aplicada debidamente, por ser estraña é incompetente la autoridad que impuso aquella pena.

El Ministerio no está conforme en que tal disposicion se caracteriza de especial y privativa, porque siendo dada para delitos muy comunes y nada raros, que siempre y en la mas antigua legislacion se han castigado, desde que tuvo origen el robo con mas ó menos circunstancias agravantes ó atenuantes, propiamente no hay esa especialidad; por que tal disposicion no se dirige á un individuo solo, sino á la clase en general de aquellos que no respetando ni la vida, ni la propiedad del ciudadano, se aprovechan ó apropian de una y otra cosa, y he aquí que no es individual aquella prohibicion penal, y por lo mismo no debe reputarse privativa, cuando ademas, por su objeto se vé que tanto se protege como se castiga por ella.

Menos puede llamarse tambien retroactiva, para el caso del asalto, robo y asesinato cometido en la persona de Saavedra en Setiembre de este año, cuando para tal fecha ya habia sido expedida la citada ley de 3 de Mayo del año que rige, y como suceso posterior al tiempo en que fué promulgada, no hay duda que está comprendido el caso en sus prescripciones y que no ha sido necesario retroceder para haberse podido aplicar. Es cierto que para los hechos criminales anteriores, de que se cree responsable á Castro, no puede decirse lo mismo; pero debe no olvidarse, que al tiempo de la perpetracion de esos mismos hechos, preexistian las leyes de 18 de Mayo y 23 del mismo mes de los años de 1871 y 1872, que lo mismo que la que nos ocupa, imponian igual pena á los salteadores y plagiaros; y se tie-

ne en consecuencia, que de aplicarse á Castro el castigo por los referidos hechos posteriores, la pena habria sido igual que la de que se trata.

Como esas disposiciones anteriores fueron dictadas en virtud del conflicto grave en que se encontraba la sociedad y del peligro inminente en que tambien se encontraban los ciudadanos, por haberse propagado el plagio y el asalto y ser un constante amago de la vida é intereses; fué debida entonces y legítimamente procedia la existencia de tales disposiciones, y era por cierto satisfecho entonces el objeto que comprende el artículo 29 de la Carta fundamental de la República; mas á la vez, habiendo cesado ya esas causas y altos motivos de consideracion para suspender las garantías individuales otorgadas por aquella Carta fundamental, por no ser repetidos ya los hechos del plagio y el asalto, deben cesar por lo mismo los efectos de la citada ley de 3 de Mayo y no ser aplicable.

Es conforme sin embargo el Ministerio, con la razon alegada por el defensor de Castro, cuando asegura, que en la persona de su defenso han sido violadas las garantías individuales que otorga el artículo 21 de aquél Supremo Cédigo, por que constituida ya la Nacion en pleno órden constitucional, ni faltan, y antes son superabundantes las disposiciones dictadas desde tiempos muy atras contra los salteadores, y por eso se pueden considerar como innecesarias las expedidas recientemente con tal objeto, ni se hace, ni es necesario tampoco, que otra autoridad fuera de la judicial, que es y se ha reconocido siempre como única competente para aquellos delitos, conozca de ellos, principalmente cuando segun se ha dicho, han cesado esos conflictos ó graves peligros que motivaron la suspension de las garantías á que alude la última ley vigente sobre plagiarios y salteadores; y si es que conforme á lo demostrado es innecesaria aquella disposicion, no menos lo es el ejercicio de las facultades concedidas á la autoridad extraña, que no

siendo del órden debido, sin embargo de la agena representacion que se le dió por aquellas mismas causas de apremio y conflicto, menos debe ser aceptada y reconocida en la mision delegada con que se le revistió en circunstancias escepcionales, restablecida como se ha dicho, la paz y tranquilidad pública, al volver la Nacion al órden normal, legítimo y constitucional.

Aun hay mas: esa ley de 3 de Mayo de que repetidas veces se ha hablado, y á cada suceso de robo con asalto que se presenta trata de aplicarse, no ha sido expedida arreglamente á las prescripciones de la misma Constitucion general, porque importando propiamente una reforma ó adiccion á esta, hasta hoy es ignorada la aprobacion de la mayoria de las Legislaturas, así como la declaracion respectiva de esa dicha aprobacion á tal reforma ó adiccion; y resulta, que no puede considerarse como emanada legítimamente de aquella, ni estimarse justamente en el rango de la Suprema ley de la Union, no siendo por lo mismo obligatoria para que á ella se arreglen las autoridades legítimas de los Estados, no obstante los preceptos que contenga, y se tiene por lo mismo, que á mas de lo innecesario é impropio de aquella disposicion, ni es aplicable á los hechos de robo con asalto, ni menos puede hacerse efectiva por una autoridad que no sea la judicial, sin que al hacerse lo contrario se infrinjan notoriamente las garantías individuales señaladas en el mencionado artículo 21 de aquella Suprema ley.

Fuera de las anteriores consideraciones legales, concurren no menos, las de que, siendo una de las prescripciones de la ley de 23 de Mayo del año que rige, la identificacion de la persona del delincuente, no solo en delito infraganti, sino con mayoria de razon, cuando fuera de aquel caso se juzga al delincuente en el término que ella establece; respecto de Andres Castro, no existe en el proceso criminal formado por la Gefatura política de la Capital, la prueba plena y perfecta de la responsabilidad que

se le atribuye, pues sin embargo de las varias personas examinadas, así en la última causa formada con motivo del asesinato y robo con asalto, cometido en la persona de Evaristo Saavedra, como en los demás hechos criminales á que se contraen las constancias de los dos voluminosos expedientes que aquella autoridad política acompaña á su informe, el testimonio de tales personas no pasa de referencias fundadas en presunciones, conjeturas, y suposiciones mas ó menos contradictorias y aisladas, que jurídicamente no pueden convencer el ánimo judicial, ni menos inclinarlo á imponer pena tan terrible como es la de muerte, en que la justificación del delito debe ser perfecta segun lo dispone la parte 3ª del artículo 3º de la misma ley citada de 8 de Mayo pasado, en consonancia con las leyes 7ª tít. 31, 26, tít. 1º part. 7ª y 12, tít. 14 part. 3ª.

Así pues, el Ministerio público en justo desempeño de la misión de buena fé que debe caracterizar sus actos, pide á ese Juzgado, que declarando violadas en la persona del reo Andres Castro las garantías individuales que otorga á los ciudadanos el artículo 21 de la Constitución general de la República:

Con fundamento de lo que dispone la ley de 20 de Enero de 1869, se sirva declarar: que la Justicia de la Union, lo protege y ampara contra el procedimiento empleado por el C. Gefe político de la Capital, y sentencia de muerte que pronunció en su contra el 11 del que rige, en la causa que le instruyó con motivo del asalto y asesinato de Evaristo Saavedra, y demás delitos anteriores que se le atribuyen, y están pendientes de juzgársele conforme á derecho. Ese Juzgado sin embargo, acordará lo mas conforme á justicia.

San Luis Potosí, Diciembre 19 de 1873.

—Gregorio Vazquez.

Es copia que certifico. San Luis Potosí, 23 de Diciembre de 1873.—Gregorio Vazquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Diciembre 24 de 1873.
—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Genaro Raigosa, contra el procedimiento del C. Gefe político del Partido de la Capital, quien condenó á Andres Castro á la pena del último suplicio, por los siguientes delitos de que fué acusado y reputado autor.

Primero: el robo con asalto y homicidio perpetrado en la persona de Evaristo Saavedra, á inmediaciones de la Villa de la Soledad de los Ranchos, la tarde del 13 de Setiembre último.

Segundo: el robo hecho á los CC. Teófilo Cabrera, Manuel Medina y Pánfilo N. en la cuesta del Cochino, en Abril 6 Mayo del año próximo pasado.

Tercero: el asalto dado á D. José Manzo y D. Manuel Espinosa, en el punto llamado Volcancillos, en 2 de Marzo del presente año, viniendo en un carruaje para esta Capital.

Cuarto: el robo perpetrado á inmediaciones del Saucito y heridas inferidas al soldado de policía montada, Severo Batres, en 25 del mismo mes y año.

Quinto: el robo con asalto intentado el 2 de Agosto último á D. Manuel F. Alonzo, D. Gabriel Lopez y D. Antonio Jáuregui, en la cuesta del Jaboncillo.

Sesto: el asalto dado á las diligencias de Zacatecas, adelante del rancho de Sta. Teresa, el 25 de Noviembre próximo pasado.

El C. Lic. Genaro Raigosa, funda su queja en la fracción 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, en virtud de considerar violadas en la persona de su defenso Andrés Castro, las garantías que otorgan los artículos 13, 14 y 21 de la Constitución.

Encuentra la infracción de los artículos 13 y 21, en la anticonstitucionalidad de la ley de 2 de Mayo último sobre salteadores y plagiarios; por que hoy que no existe ninguna de los graves conflictos que detalla el artículo 29 de la misma Constitución,

solo pueden suspenderse las garantías individuales mediante una reforma á la Constitución, en los terminos que marca su artículo 127.

Hace consistir la infraccion del artículo 14, en que la mencionada ley de 2 de Mayo no ha sido aplicada exactamente en el juicio que motiva éste recurso, por que no consta legalmente comprobado que Castro sea autor de los delitos que se le imputan.

El C. Gefe político de la Capital, acompaña como informe con justificacion, el proceso original instruido contra Castro.

El C. Promotor fiscal, aunque no cree especial y privativa la ley de 2 de Mayo, opina como el defensor, que es anticonstitucional, que en el caso se ha violado el artículo 21 de la Constitución, por lo cual, y en virtud de no estar comprobado legalmente que Castro sea autor de los delitos que se le atribuyen, pide se le otorgue el amparo solicitado.

Considerando 1º: que la ley de 2 de Mayo último es constitucional, por que el Congreso de la Union la ha expedido en uso de la facultad que le otorgan los artículos 23, 29 y 72 fraccion XXX de la Constitución, sin que pueda atenderse, que no existe actualmente grave perturbacion de la Sociedad con la comision de los delitos de robo con asalto; pues para convencerse de que sí existe, basta recorrer los numerosos casos que se suceden diariamente de robo con asalto; respecto del requisito de la concurrencia del voto de la mayoría de las Legislaturas, es muy de notarse que lejos de oponerse estas á la observancia y aplicacion de esa ley, antes bien la acatan exactamente, como lo demuestra el hecho constante de que conforme á su artículo 5º, ellas mismas otorgan ó deniegan el indulto en los casos de robo con asalto que se suceden en sus respectivos Estados; además, que diversos Congresos generales desde el año de 1861 á la fecha, han unánimamente considerado de sus facultades, expedir la ley sobre saltadores y plagiarios.

Considerando 2º: que la ley de 2 de Mayo último suspende para los saltadores, las garantías que otorgan los artículos 1º y 21 de la Constitución, por lo cual no pueden decirse violadas en la persona de Andres Castro.

Considerando 3º: que examinado el proceso instruido contra Castro, no aparece legalmente comprobado que sea autor de ninguno de los delitos que se le atribuyen, por lo cual no puede aplicársele ninguna pena, y menos la irreparable de muerte, por que si bien es cierto que en el proceso existen diseminadas muchas presunciones de culpabilidad contra Castro, aunque se supongan urgentes, esto no faculta para aplicarle la pena de muerte, por que la ley de 2 de Mayo citada requiere para que se aplique, como condicion *sine qua non*, que sea probado el delito y delincuente; y no habiéndose verificado esto último, no se ha aplicado exactamente esa ley, con violacion del artículo 14 de la Constitución.

Considerando 4º: que aplicar en éste caso á Castro la pena de muerte por delito de robo con asalto, sin estar comprobado, es tambien con violacion del artículo 23 de la Constitución; por que no pudiendo ser en rigor de derecho saltador de caminos, sino aquel que denuncian tal sin ninguna especie de duda las pruebas legítimas y perfectas, con arreglo á lo que previenen las leyes 26 tít. 1º, 7 tít. 31 part. 7ª y 12 tít. 14 part. 3ª, condenar á Castro á la pena capital por presunciones mas ó menos vehementes de ser reo de robo con asalto, sería con infraccion del artículo mencionado y del 29 de la Constitución, que no quiere se aplique aquella última é irreparable pena sino con toda madurez, deliberacion y seguridad de que es acreedor á ella el condenado.

Considerando 5º: que aunque en algunos casos por las leyes antiguas se podía condenar por pruebas presuntivas por delitos privilegiados, á causa de la dificultad de probarse plenamente, debe tenerse presente que

en tales casos, sin embargo, se aplicaba pena extraordinaria, pero no la de muerte, y además, hoy según el sistema que nos rige, no podría aplicarse ni aún aquella, sino que siempre se requiere prueba perfecta en todo caso.

Considerando 6º: que Castro aparece autor de otros delitos del orden común, por los que no se le ha acabado de juzgar por quien corresponde.

Por tales consideraciones y fundamentos legales, y de conformidad en parte con lo pedido por el O. Promotor fiscal, debía resolver y resuelvo.

Primero: que la Justicia de la Unión ampara y protege á Andres Castro, contra la sentencia del C. Gefe político de la Capital, que le condenó á la pena del último suplicio, por delitos de robo con asalto.

Segundo: que se ponga al expresado reo á disposicion de su Juez competente, para que se continuen las causas que se le han comenzado á instruir por otros delitos del orden común.

Hágase saber; publíquese y elévense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Lo decretó y firmó el C. Lic. Conrado Diaz Soto, Juez interino del Estado.—Doy fe.—*Conrado Diaz Soto.*

Es copia que certifico. San Luis Potosí, Diciembre 27 de 1873.—*Donaciano Morroy*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 8 de 1874. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el Lic. Genaro Raigosa como defensor del reo Andres Castro, contra los procedimientos del Gefe político de la capital del Estado que condenó á su defenso á la pena de muerte como culpable de haber cometido varios actos de robo con asalto en despoblado y otras circunstancias agravantes, aplicándo-

le la ley de 2 de Mayo del año pasado contra saltadores y plagiaros, con violacion de las garantías que consignan los artículos 13, 14 y 21 de la Constitucion federal; y Considerando: Que en el proceso seguido contra Castro aparecen numerosas pruebas de que es autor de los diversos delitos de que se le ha hecho cargo, y que el examen circunstanciado de la mayor ó menor plenitud de cada una de estas pruebas es de la exclusiva competencia del Juez del delito que en el caso presente es el Gefe político. Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal se decreta: 1º que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 24 de Diciembre del año pasado que declaró haber lugar al amparo federal. 2º. La Justicia de la Unión no ampara ni protege á Andres Castro contra la sentencia del Gefe político de San Luis Potosí, que lo condenó á la pena capital por delitos de robo con asalto.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaren.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 31 de 1874.—*Lic. Emilio Orlaz*, oficial mayor.